

LEGAJO DE ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS FORMADO EN LA CAUSA N° CFP 1244/2015, CARATULADA: “N.N. SOBRE INFRACCIÓN ART. 303 DEL CÓDIGO PENAL”. J.N.P.E. N° 9. SECRETARÍA N° 18. EXPEDIENTE N° CFP 1244/2015/23/CA13. ORDEN N° 32.129. SALA “B”.

Buenos Aires, de febrero de 2025.

VISTOS:

Los recursos de apelación interpuestos por S. B. R. y por A. M. contra la decisión del tribunal de la instancia anterior de denegar las solicitudes efectuadas por aquéllas para que se disponga la transferencia de distintas sumas de dinero, secuestradas oportunamente en el marco de un allanamiento, a cuentas bancarias abiertas por las nombradas a los fines de concretar una regularización de bienes bajo el régimen del Título II de la ley 27.743, y de imponer el pago de las costas procesales de conformidad con la regla general establecida por el art. 531 del C.P.P.N.

Los memoriales mediante los cuales S. B. R. y A. M. informaron en la oportunidad prevista por el art. 454 del C.P.P.N.

Y CONSIDERANDO:

1º) Que, por la resolución en examen, el tribunal de la instancia anterior rechazó las solicitudes que S. B. R. y A. M. , en ambos casos con patrocinio letrado, efectuaron para que distintas sumas de dinero cuya propiedad aducen, secuestradas a mediados del año 2016 durante el allanamiento del inmueble de la calle J. F. S. N° de esta ciudad, dispuesto en el marco de la causa N° FSM 20097/2015, a la que los autos principales a los que corresponde este legajo se acumularon jurídicamente, y que en la actualidad se encontrarían afectadas al trámite de este proceso, sean transferidas a las “Cuenta[s] Especial[es] de Regularización de Activos” que las nombradas abrieron con motivo y a los fines de beneficiarse con el régimen de regularización de activos instaurado por el Título II de la ley 27.743.

2º) Que, a los fines de contextualizar las solicitudes de S. B. R. y de A. M. referidas por el considerando previo, cabe recordar que, en el marco de la declaración indagatoria que G. A. G. prestó en los autos principales, el tribunal de la instancia anterior indicó que al nombrado se le atribuía, entre otros hechos presuntamente ilícitos, “...[l]a posesión de un millón quinientos cincuenta y cinco mil novecientos ochenta dólares estadounidenses (USD 1.555.980), cuarenta y siete mil trescientos ochenta euros (EUR 47.380), un ~~millón novecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos setenta y seis pesos~~



(ARS 1.948.476), mil trescientos treinta y siete reales (BRL 1337) y mil ochocientos sesenta pesos uruguayos (UYU 1860) sin haber podido justificar que tuvieran un origen lícito. El dinero se encontraba oculto en diferentes sectores de su domicilio particular (J. F. S. N° de esta ciudad) que fue allanado el 9 de mayo de 2016 en virtud de un procedimiento ordenado en la causa conexa FSM 20097/2015. Proveniría de parte de la ganancia ilícita que G. obtuvo como jefe de una organización criminal que operó desde principios de 2012 hasta mediados de 2016; y, en particular, por la comisión de delitos de evasión tributaria y delitos de intermediación financiera no autorizada, cometidos en nombre de la Asociación Mutual Silda, Asociación Mutual Propyme, Recasur Argentina SRL, Recaudadora Centenario SA y Cathau S.A... ”.

Por otro lado, corresponde agregar que el juzgado “a quo” dictó recientemente, también en el marco del legajo principal al que corresponde este incidente, el auto de procesamiento de G. A. G. por el comportamiento presunto referido por el párrafo anterior, el cual estimó constitutivo en principio del delito de legitimación de activos de origen ilícito previsto por el art. 303 del Código Penal. La defensa de G. A. G. impugnó aquel temperamento mediante un recurso de apelación que fue concedido por el tribunal de la instancia anterior y que motivó la elevación a esta Sala “B” de un legajo en el que se ha fijado la audiencia prevista por el art. 454 del C.P.P.N. (CFP 1244/2015/30/CA14).

Finalmente, cabe recordar que el tribunal de la instancia anterior, en el contexto de las causas Nos. FSM 20097/2015 y CPE 1011/2018, esta última formada a partir de testimonios de la primera, dictó en su momento el auto de procesamiento de G. A. G. , y posteriormente el auto de elevación de la causa a juicio, por considerarlo penalmente responsable, en la calidad de autor o de partícipe necesario, según el caso, de hechos presuntos que se estimaron constitutivos del delito de evasión tributaria, de intermediación financiera no autorizada y de asociación ilícita (confr. FSM 20097/2015/32/CA12, res. del 1/7/2020, Reg. Interno N° 274/20; y CPE 1011/2018/18/CA2, res. del 15/9/2023, Reg. Interno N° 407/23, de esta Sala “B”, como también las resoluciones dictadas por el tribunal de la instancia anterior los días 6 de octubre de 2022 y 25 de septiembre de 2024 en el marco de las causas Nos. FSM 20097/2015 y CPE 1011/2018, respectivamente).

3º) Que, de las sumas de dinero secuestradas en su momento en el marco del allanamiento del domicilio particular de G. A. G. , S. B. R. sostiene que son de su propiedad un millón quinientos mil dólares estadounidenses (u\$s 1.500.000), cuarenta mil euros (€ 40.000) y un millón quinientos mil pesos (\$ 1.500.000), mientras que A. M. sostiene que le pertenecen veinticuatro mil



seiscientos noventa y siete dólares estadounidenses (u\$s 24.697), mil trescientos nueve euros (€ 1.309) y ciento once mil quinientos setenta y siete pesos (\$ 111.577).

Con relación a las circunstancias aludidas precedentemente, G. A. G. , mediante una presentación efectuada con el patrocinio de la defensa de aquél, que también patrocinó a S. B. R. en los escritos que aquélla presentó en este legajo, manifestó: *“...vengo por el presente a confirmar y ratificar en todos sus términos, las manifestaciones realizadas recientemente tanto por mi Sra. esposa, A. M. , como por la Sra. S. B. R. . Ello, en cuanto a la reivindicación de la titularidad de los fondos [aludidos por el párrafo anterior] , como así también, respecto de las circunstancias o situaciones personales relatadas en tales presentaciones [...] Entiendo que la situación puede resultar confusa para V.S., pero lo expresado en dichos escritos es la completa realidad [...] Es verdad que en varias oportunidades durante la tramitación del Exp. 20.097/2015, intenté reivindicar, con diferentes argumentos, la titularidad del dinero que fuera secuestrado, como así también es verdad que pretendí ingresar al ‘blanqueo’ consagrado por la Ley 27.260; pero la realidad es que ninguno de estos intentos pasó de ser eso: meros intentos (desesperados, podría agregar) de recuperar un dinero del cual NO era el titular, pero del que SI era responsable directo por su pérdida [...] Quisiera también aclarar, con respecto a las presentaciones de referencia [efectuadas por S. B. R. y A. M.], que es absolutamente cierto que los fondos que se encontraban en la caja de seguridad del dormitorio principal pertenecían a mi mujer [en alusión a A. M.] (había dinero de la madre de ella también), y que la Sra. R. me había confiado (en base a nuestra relación sentimental) la guarda de sus ahorros personales (detallados en su presentación); y asimismo es verdad, tal como lo expresara mi esposa en el momento del allanamiento, que ella desconocía completamente los montos y la titularidad del restante dinero encontrado en el departamento (fuera del dormitorio me refiero). Para esa época, y por muchos años más, mi mujer desconocía absolutamente mi relación con la Sra. R. [...] también conviene dejar expresado que, por aquellos años, la Sra. S. R. desconocía completamente cual era mi actividad profesional [...] Ella no tenía ninguna vinculación con las sociedades y/o empresas y/o negocios con los que se me vincula: únicamente me permitió guardar en un espacio sin uso en su instituto de belleza, algunas cajas con viejos papeles vinculados a la Mutual Propyme, pero sin tener ninguna idea de qué material se trataba [...] Por último, debo reconocer a V.S., que el saldo del dinero secuestrado que no se encuentra alcanzado por los reclamos de las Sras. M. y R. (aproximadamente se trata de unos: U\$S 80.520, UR\$ 860, R\$ 25 y \$ 373.989 -estos montos NO reconocen el dinero que falt[ó] entre lo secuestrado y lo que llegó al juzgado-), si resulta*



ser dinero de mi propiedad, pero dadas las limitaciones consagradas en la propia ley 27.743, no puedo ingresar a la regularización de activos consagrada por la norma...” (confr. el escrito de G. A. G. de fecha 9 de octubre de 2024 incorporado a este legajo de actuaciones complementarias; las mayúsculas son del original).

4º) Que, las estipulaciones de la ley 27.743 que las partes recurrentes invocan en sustento de las solicitudes en examen presuponen un estado de cosas que no se verifica en el caso, esto es, específicamente para la clase de activo al que viene haciéndose referencia, que la persona que pretende acceder a la regularización de la que se trata cuente con la libre disponibilidad de las sumas de dinero para concretar, por la sola voluntad de aquélla, el depósito y/o la transferencia a la “*Cuenta Especial de Regularización de Activos*” que se instituye por el art. 26 del cuerpo legal aludido como vía necesaria para materializar la regularización.

En este sentido, es en función de la posibilidad de efectivizar el depósito y/o la transferencia de los fondos a regularizar, como hecho objetivo, que la ley 27.743 y la reglamentación dictada en consecuencia no exigen del interesado el aporte adicional de elementos para acreditar la titularidad de las sumas que se acrediten en la “*Cuenta Especial de Regularización de Activos*”. En efecto, por el Anexo I aprobado por la Resolución General A.F.I.P. N° 5528/2024, dictado en virtud de las delegaciones establecidas por el art. 44 de la ley 27.743 y los arts. 6 y 25 del decreto N° 608/2024, se establece: “...*A los fines de acreditar la titularidad y valuación de los bienes a la fecha de regularización, se deberá presentar junto con la declaración jurada de regularización, la documentación y/o constancias que, para cada caso, se indican a continuación: [...] APARTADO A – BIENES EN ARGENTINA [...] a) Moneda nacional o extranjera, sea en efectivo o depositada en cuentas bancarias o de cualquier otro tipo de entidades residentes en la República Argentina [...] Para acreditar titularidad y valuación se deberá presentar certificado de depósito o resumen bancario de la ‘Cuenta Especial de Regularización de Activos’ en moneda nacional y/o extranjera donde se indique el nombre completo del titular, Clave Bancaria Uniforme (CBU), y el saldo depositado en la cuenta...*”.

5º) Que, al no verificarse la circunstancia objetiva a la que se hizo alusión por el considerando que antecede, corresponde concluir que lo afirmado por las partes recurrentes en cuanto a que las meras afirmaciones de S. B. R. y de A. M. serían suficientes para acreditar la titularidad de ciertos



activos a los fines del goce de los beneficios establecidos por el Capítulo VI del Título II de la ley 27.743, no encuentra sustento en las previsiones de aquel cuerpo normativo ni en la reglamentación dictada en consecuencia.

Menos aún podría estimarse que aquellas afirmaciones aisladas permitan, en definitiva, sortear los efectos de medidas de coerción real adoptadas en el marco de un proceso penal con sustento en lo establecido por el art. 231 del C.P.P.N. respecto de una persona alcanzada en principio por una causal de exclusión del régimen de regularización de activos al que viene haciéndose referencia.

En este sentido, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que, en materia de interpretación legal, “... ‘...la admisión de soluciones disvaliosas no resulta compatible con el fin común tanto de la tarea legislativa como de la judicial’ (Fallos: 249: 37 y 330:1649) [como también] que los jueces, en cuanto servidores de la justicia en el caso concreto, no deben limitarse a la aplicación mecánica de las normas y desentenderse de las circunstancias fácticas con incidencia en la resolución del conflicto, pues de lo contrario aplicar la ley se convertiría en una tarea incompatible con la naturaleza misma del derecho y con la función específica de los magistrados, tarea en la que tampoco cabe prescindir de las consecuencias que se derivan de los fallos, pues ello constituye uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de su decisión (confr. arg. Fallos: 315:992; 323:3139; 326:3593; 328:4818 y 331:1262, entre otros)...” (confr. Fallos 346:407).

6º) Que, lo establecido por el considerando anterior adquiere relevancia a poco de reparar en que, por ejemplo, el allanamiento en el marco del cual se produjo el secuestro de las sumas de dinero de las que se trata tuvo lugar a mediados del año 2016 y que recién ocho años después, durante el año 2024, A. M. se presentó invocando la titularidad de parte de aquél, sin aportar elemento alguno de respaldo y a los fines de lograr una regularización tributaria. También, en que previamente G. A. G. había intentado obtener la devolución o la desafectación de aquellos bienes del proceso penal en el que se había dispuesto su secuestro, para lo cual recurrió a distintas vías, como lo fue la pretensión de acogerse al régimen de exteriorización de bienes instaurado por la ley 27.260 o de demostrar, con posterioridad, que todo el dinero secuestrado en el domicilio de la calle J. F. S. N° de esta ciudad, era propiedad de RECAUDADORA CENTENARIO S.A. (confr. las constancias de los incidentes Nos. FSM 20097/2015/5 y FSM 20097/2015/13).

En el caso de S. B. R. , a lo recordado por el párrafo anterior con relación al tiempo significativo de auto otorgamiento de la titularidad de lo secuestrado, se suma que la nombrada invoca ser la titular de la mayor parte

del dinero en moneda extranjera y nacional secuestrado del inmueble del que se trata, sosteniendo, también sin aportar elemento probatorio alguno que sustente la versión, que obtuvo aquella cantidad considerable de dinero a partir de la enajenación de “...14 fondos de comercio KODAK EXPRESS completos (con todo lo que había dentro de cada local)...”, pero con la aclaración de que “...la entrega del fondo de comercio es muy sencilla: con entregar las llaves del local y alguna que otra cuestión relativa a las máquinas [de revelado con un valor aproximado de “...entre cien mil (100.000) y ciento cincuenta mil (150.000) dólares americanos...”], se conformaba la operación sin mayores formalidades...”, lo que parecería no atender a lo establecido por la ley 11.867 de “Transmisión de establecimientos comerciales e industriales”.

7º) Que, por lo establecido precedentemente, con independencia de cualquier otra consideración posible, corresponde confirmar la resolución recurrida en cuanto por aquélla se dispuso rechazar las solicitudes recordadas por el considerando 1º de este pronunciamiento.

8º) Que, por último, dado que por los recursos de apelación en examen no se introdujo agravio autónomo alguno en torno a la decisión del juzgado “a quo” de imponer a las partes vencidas el pago de las costas procesales por la actividad desarrollada en aquella instancia, corresponde declarar parcialmente mal concedidas las impugnaciones de S. B. R. y de A. M. en lo que concierne a la decisión aludida (confr. arts. 444, 445 y 450 del C.P.P.N.).

Por ello, **SE RESUELVE:**

I. CONFIRMAR la resolución recurrida en cuanto por aquélla se decidió rechazar las solicitudes recordadas por el considerando 1º de este pronunciamiento.

II. DECLARAR PARCIALMENTE MAL CONCEDIDOS los recursos de apelación interpuestos contra la decisión del juzgado “a quo” de imponer el pago de las costas procesales por la actividad desarrollada en la instancia anterior de conformidad con la regla general prevista por el art. 531 del C.P.P.N.

III. CON COSTAS con relación a lo resuelto por el punto I de la presente (arts. 530, 531 y ccs. del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese de conformidad con lo dispuesto por la resolución N° 96/2013 de superintendencia de esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico y devuélvase.



Poder Judicial de la Nación

Firman sólo los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía restante de esta Sala.

